

¿Necesitamos Cuatro Años Más del Presidente Uribe?

Por Mauricio García Durán S.J. Director del CINEP

El panorama político nacional ha estado agitado en los últimos meses y, en gran medida, dicha agitación está relacionada con la dinámica política que conlleva la posibilidad de una continuidad por cuatro años más del actual mandatario de los/as colombianos/as. Para algunos sectores, afectos al presidente Uribe, su continuidad es una necesidad para seguir haciendo frente a los retos que enfrenta el país, particularmente en el tema de seguridad. Se requerirían cuatro años más para consolidar los resultados de la política de Seguridad Democrática.

Sin embargo, cuando se mira con detenimiento la situación nacional, lo que aflora son una serie de hechos críticos en los ámbitos político (el proceso de la parapolítica), económico (las pirámides), social (protesta social creciente) y de seguridad (continuidad del paramilitarismo y los "falsos positivos") que indicarían que los logros de la Seguridad Democrática no son tan claros, contundentes y pertinentes como se le ha querido mostrar a la opinión pública. En este número de Cien Días queremos presentar una serie de artículos que nos permiten aproximarnos a algunas de estas situaciones que ponen en cuestión el modelo 'uribista' y que han estado sobre el tapete en las últimas semanas.

En primer lugar, tenemos la hecatombe social y política que se ha generado con el colapso de las pirámides, no sólo por el impacto en amplios sectores de población que habían invertido en las mismas, sino porque puso de presente la falta de previsión y medidas de parte del gobierno para hacer frente a un fenómeno que ha estado operando durante todos los años que lleva Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. Una adecuada respuesta a la crisis que se genera con las pirámides y con la crisis financiera a nivel mundial exigiría políticas que van en dirección contraria a algunas de las que ha impulsado este gobierno durante seis años.

En segundo lugar, los conflictos sociales han ido en aumento en lo que va de este gobierno, alcanzando el año pasado la mayor cota histórica de protestas sociales en los últimos cuarenta años. Dicha dinámica ha seguido en ascenso en este año, de forma tal que el país ha sido testigo de algunos conflictos sociales de marca mayor como fueron la huelga de los corteros de caña, la Minga indígena y la huelga de los empleados de la Justicia, analizadas en este número de Cien Días. Este preocupante nivel de protesta social es un indicador claro de unas políticas públicas que sólo han favorecido a algunos sectores privilegiados, mostrando al mismo tiempo la ausencia de políticas sociales que benefician estructuralmente a los sectores más pobres y excluidos.

En tercer lugar, el incremento del área cultivada en coca, la continuidad del fenómeno paramilitar y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario suscitan interrogantes sobre la eficacia de la política de Seguridad Democrática, elemento nodal de la positiva imagen del presidente Uribe. El caso de los "falsos positivos", que implicó la remoción de alrededor de cuarenta oficiales del Ejército, puso de manifiesto una forma perversa de operar que se consolidó en sectores militares para poder ofrecerle al presidente Uribe los 'resultados' que estaba reclamando en la lucha contra el "terrorismo". Pero los límites de la política pública en materia de derechos humanos son mayores cuando se ve la posición del Gobierno con relación a la ley de víctimas que hace curso en el Congreso, promoviendo la aprobación de una ley que en lugar de favorecer a las víctimas las perjudica.

En cuarto lugar, el triunfo de Barack Obama en Estados Unidos interroga la manera unilateral como se ha manejado la política exterior colombiana en estos años, donde la incondicional alianza con el gobierno del presidente Bush conlleva serios retos cuando se da un cambio de dirección política en el país del norte. A estos retos se suman los que plantean otros escenarios internacionales, como es el Examen Periódico Universal al que se someterá Colombia en el seno de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 10 de diciembre.

Estas dimensiones, entre otras, en las que la administración Uribe muestra límites sugieren la pertinencia de un cambio en la máxima dirección del Estado, que haga frente a los problemas que se han consolidado con el "modelo Uribe" en los últimos 6 años. Y ello parece confirmarlo las últimas encuestas (ver Semana No. 1387, Diciembre 1 de 2008) donde el 58% de los entrevistados considera que la situación del país está empeorando, cuando hace menos de cinco meses sólo el 14% consideraba que ello era así; por otro lado, los que estiman que la situación del país ha mejorado cayeron del 73 al 30%. No en vano la opinión favorable sobre la reelección ha caído más de 20 puntos porcentuales entre julio y noviembre, pasando del 74 al 54%, siendo aún menor (47%) cuando se refiere a la reelección inmediata para el 2010.